**RECURSO 422/2020**

**RESOLUCIÓN M.C. 4/2021**

# RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Sevilla, 14 de enero de 2021.

**VISTA** la solicitud de medida cautelar formulada por la entidad **UNEI INICIATIVA SOCIAL, S.L.** en relación con el contrato denominado "Suministro de dispositivos y detectores de Teleasistencia para el Servicio Andaluz de Teleasistencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía" (Expte. CA-03/2020), respecto del lote 4, promovido por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, ente instrumental adscrito a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, este Tribunal, en sesión celebrada el día de la fecha, ha adoptado la siguiente

## RESOLUCIÓN

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.** El 15 de diciembre de 2020, se presentó en el Registro de este Tribunal, escrito de recurso especial interpuesto por la entidad UNEI INICIATIVA SOCIAL, S.L. (en adelante UNEI), contra el acuerdo por el que se excluye su oferta de la licitación del contrato antes mencionado, en relación al lote 4. En su escrito de recurso, la recurrente solicita la suspensión del procedimiento de licitación.

**SEGUNDO.** Mediante oficio de la Secretaría de este Tribunal de 16 de diciembre de 2020, se dio traslado al órgano de contratación del escrito de interposición de recurso y se le solicitó la remisión del informe al mismo, las alegaciones sobre la medida cautelar de suspensión instada por la entidad recurrente, así como

Es copia auténtica de documento electrónico





| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | PABLO VICENTE MONTALVO | 15/01/2021 | PÁGINA 2/7 |
| VERIFICACIÓN | | | |

la documentación necesaria para su resolución. A la fecha de de aprobación de esta Resolución no ha tenido entrada en este Tribunal la documentación solicitada.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO**. La entidad recurrente solicita la medida cautelar de suspensión en su escrito de interposición del recurso especial en materia de contratación, por lo que ha de estarse, respecto a su tramitación y adopción, a lo dispuesto en los artículos 49 y 56.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP).

**SEGUNDO**. Las medidas cautelares, como señala el artículo 49.1 de la LCSP, irán dirigidas a corregir infracciones del procedimiento o impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados y podrán estar incluidas, entre ellas, las destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación.

Al respecto, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha tenido oportunidad de pronunciarse con frecuencia sobre la adopción de medidas cautelares en el marco de los procedimientos de adjudicación de contratos, si bien los escasos pronunciamientos resultan de enorme interés. En este sentido, en el asunto C-424/01 (ATJ de 9 de abril de 2003), el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la ponderación que debe llevarse a cabo para justificar la adopción de la medida, indicando que la Directiva 89/665/CEE no prohíbe la previa ponderación de las posibilidades de que, con posterioridad, pudiera prosperar una pretensión de anulación de la decisión de la entidad adjudicadora con base en su ilegalidad, por lo que queda en manos del Derecho nacional la regulación de esta exigencia.

Ciertamente, la regulación de las medidas cautelares en la legislación de contratos públicos no define los parámetros a tener en cuenta para su adopción o denegación. Es por ello que debe acudirse con carácter supletorio a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre suspensión de la ejecución del acto impugnado y a la propia doctrina del Tribunal Supremo en la materia –se citan las Sentencias de 25 de febrero de 2011 y de 26 de septiembre de 2011 (RJ 2011\11\1653 y RJ 2011\7212) -, pues los principios

Es copia auténtica de documento electrónico



| FIRMADO POR | PABLO VICENTE MONTALVO | 15/01/2021 | PÁGINA 3/7 |
|---|---|---|---|
| VERIFICACIÓN | | | |

asentados por el Alto Tribunal con relación al proceso cautelar cabe entenderlos de aplicación en el marco de este procedimiento.

Así, el Tribunal Supremo señala que toda decisión sobre las medidas cautelares debe adoptarse ponderando las circunstancias del caso y teniendo en cuenta la finalidad de la medida cautelar y su fundamento constitucional, que puede resumirse en los siguientes puntos:

- **Necesidad de justificación o prueba, aún incompleta,** de aquellas circunstancias que puedan permitir al Tribunal efectuar la valoración de la procedencia de la medida. La mera alegación sin prueba no permite estimar como probado que la ejecución del acto impugnado pueda ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación.

- **El periculum in mora**: es decir, la medida ha de ir encaminada a asegurar que la futura resolución del procedimiento principal pueda llevarse a la práctica de modo útil.

- **Ponderación de los intereses concurrentes**: se debe ponderar, ante todo, la medida en que el interés público exija la ejecución, para otorgar o no la suspensión según el grado en que dicho interés esté en juego. En definitiva, cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, solo perjuicios de elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución del acto.

- **La apariencia de buen derecho (fumus boni iuris):** supuso una gran innovación respecto a los criterios tradicionales utilizados para la adopción de las medidas cautelares, si bien la Jurisprudencia del Tribunal Supremo viene limitando, tras la entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, la aplicación del principio a aquellos supuestos en que el acto impugnado evidencia un error de tal naturaleza y magnitud que en sí mismo es causa suficiente para provocar la suspensión de la ejecución del acto, sin necesidad de aventurarse en enjuiciamientos más profundos, propios ya de un análisis de fondo.

Es copia auténtica de documento electrónico



| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | PABLO VICENTE MONTALVO | 15/01/2021 | PÁGINA 4/7 |
| VERIFICACIÓN | | | |

**TERCERO**. En el supuesto analizado, la recurrente solicita la medida cautelar de suspensión del procedimiento de licitación hasta la resolución del recurso interpuesto. En concreto, y en síntesis, pone de manifiesto que concurren los requisitos establecidos por la doctrina administrativa de los órganos competentes para resolver los conflictos en materia de contratación pública, esto es:

- La existencia de circunstancias que, ante la ausencia de suspensión del procedimiento, dejarían el recurso especial en materia de contratación sin efecto útil (periculum in mora).
- No concurren intereses generales ni de terceros que deban prevalecer.
- La existencia de vicios de legalidad en el acto objeto de impugnación.
- La adopción de la medida cautelar de suspensión en tanto se resuelva el presente recurso especial en materia de contratación no es susceptible de causar perjuicios de ninguna naturaleza ni a la Administración contratante ni a terceros.

Pues bien, se ha de indicar que el proceso cautelar en el marco del procedimiento principal del recurso especial va esencialmente dirigido a asegurar la eficacia de la resolución de este último, previéndose además breves plazos legales para la tramitación del recurso, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento judicial cuya tramitación es más compleja y su duración más prolongada. Es por ello que las medidas cautelares en el seno del recurso especial no han de serlo por un lapso de tiempo dilatado, lo que ya supone de partida un menor riesgo o perjuicio para el interés público que demanda la adjudicación y formalización del contrato.

De otro lado, no puede obviarse que, según tiene manifestado el Tribunal Constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución se satisface facilitando que la ejecutividad del acto administrativo pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que este, con la información y contradicción que resulte menester, resuelva sobre la suspensión. En este sentido, la Sentencia 78/1996, de 20 de mayo, señala que *«La ejecución inmediata de un acto administrativo es, pues, relevante desde la perspectiva del art. 24.1 de la CE ya que si tiene lugar imposibilitando el acceso a la tutela judicial puede suponer la desaparición o pérdida irremediable de los intereses cuya protección se pretende o incluso prejuzgar irreparablemente la decisión final del proceso causando una real indefensión».*

Es copia auténtica de documento electrónico





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | | PABLO VICENTE MONTALVO | 15/01/2021 | PÁGINA 5/7 |
| VERIFICACIÓN | | | | |

En el presente supuesto, la ausencia de alegaciones a la suspensión por parte del órgano de contratación, impide a este Tribunal disponer de la información suficiente para poder determinar en qué medida la suspensión solicitada afecta al interés público, no pudiendo valorar qué interés resulta más digno de protección, si el interés público de la Administración o los intereses particulares de la recurrente.

Finalmente, debe señalarse que en el presente supuesto, siendo el acto impugnado la exclusión de la oferta de la recurrente respecto del lote 4, no sería de aplicación el artículo 21.3 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre –relativo a la impugnación de la adjudicación de lotes concretos-. No obstante, atendiendo a las circunstancias del presente caso y habiéndose procedido a la apertura de los sobres que integran las ofertas y conocidas estas en su totalidad, nada impide que se pueda continuar con el procedimiento de adjudicación respecto de los lotes no afectados por la impugnación.

Por lo tanto, este Tribunal considera que a los solos efectos de la tutela cautelar y sin perjuicio del ulterior análisis de los motivos de fondo del recurso que se efectúe en el procedimiento principal, la suspensión del acuerdo recurrido es el mejor remedio para asegurar la eficacia de la resolución del recurso en caso de una eventual estimación del mismo.

Por todo lo expuesto, este Tribunal,

**ACUERDA**

**PRIMERO**. Adoptar la medida cautelar de suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato denominado "Suministro de dispositivos y detectores de Teleasistencia para el Servicio Andaluz de Teleasistencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía" (Expte. CA-03/2020), respecto del lote 4, promovido por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, ente instrumental adscrito a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

**SEGUNDO**. Notificar la presente resolución a las partes interesadas en el procedimiento.

Es copia auténtica de documento electrónico



| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | PABLO VICENTE MONTALVO | 15/01/2021 | PÁGINA 6/7 |
| VERIFICACIÓN | [illegible] | | |

De conformidad con el artículo 49.2 de la LCSP, contra la presente resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio del que proceda contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal de recurso.

Es copia auténtica de documento electrónico





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | | PABLO VICENTE MONTALVO | 15/01/2021 | PÁGINA 7/7 |
| VERIFICACIÓN | | | | |